


RADICACIÓN No.110014003021-2023-00026-00

HAROLD ARMANDO RIVAS CACERES <rivas_harold@hotmail.com>

Mié 19/04/2023 12:14 PM

Para: Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (492 KB)

RESPUESTA EXCEPCIONES ALLIANZ.pdf;

Señor:

JUEZ 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL.

RADICACIÓN No.110014003021-2023-00026-00

DE: CLAUDIA ESPERANZA BRICEÑO Y OTROS.

VS. ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS.

HAROLD ARMANDO RIVAS CÁCERES, reconocido como apoderado de la parte actora, por medio del presente escrito me permito radicar memorial recorriendo el TRASLADO de las excepciones formuladas por el Dr. GUSTAVO ALBERTO HERRERA, quien representa los intereses de la compañía ALLIANZ SEGUROS S.A.

Cordialmente.

HAROLD RIVAS.

Señor:

JUEZ 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

E. S. D.

REF: PROCESO DECLARATIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

RADICACIÓN No.110014003021-2023-00026-00

DE: CLAUDIA ESPERANZA BRICEÑO Y OTROS.

VS. ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS.

HAROLD ARMANDO RIVAS CÁCERES, reconocido como apoderado de la parte actora, por medio del presente escrito descorro el TRASLADO de las excepciones formuladas por el Dr. GUSTAVO ALBERTO HERRERA, quien representa los intereses de la compañía ALLINAZ SEGUROS S.A. De la siguiente manera:

IV EXCEPCIONES DE MERITO

A. “EXCEPCIONES DE FONDO RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD POR EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO”

- 1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA PARTE PASIVA DE LA ACCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA EN CUANTO AL FALLECIMIENTO DE EDGAR JOSE TOBA BRICEÑO.**

- 2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR CONFIGURARS LA CAUSAL “HECHO DE UN TERCERO” RESPECTO A LOS PRESUNTOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLECIMIENTO DE JHON FREDY ACOSTA BRICEÑO**

Por tratarse de un mismo hilo argumentativo enfrente las dos en un mismo escrito.

Vano esfuerzo realiza el Dr. Gustavo, en pretender sacar adelante esta excepción basándose en la hipotética versión que el accidente se produjo por impericia en el manejo cuando el agente de tránsito codifico al hoy occiso con la causal 139 dentro del informe de tránsito, cabe la pena resaltar que la resolución 1168 de 2012 del Ministerio del Transporte se indicó en la causal 139 “impericia en el manejo- cuando el conductor no

tiene práctica, experiencia ni habilidad en la conducción para maniobrar ante una situación de peligro, **siempre y cuando sea demostrable**" (negrillas se resalta), Olvido el Dr. Gustavo, arrimar con el escrito prueba en donde demostrara la impericia en el manejo, del hoy fallecido, por el contrario enfiló sus baterías en argumentos vacíos, huérfanos de prueba que no rompen con el nexo de causalidad para alegar un eximente de responsabilidad como lo es el de culpa exclusiva de la víctima, o hecho de un tercero para el parrillero, olvido indicar El Dr. Gustavo igualmente que su cliente fue codificado con la causal 157 no tener precaución al maniobrar el vehículo cuando está en movimiento, lo que realmente si se corrobora con el video arrimado como prueba dentro del proceso y del exceso de velocidad en una zona urbana donde debió haber transitado a 30 k/h para evitar el accidente.



De la anterior fotograma extractada dentro del video se puede observar sin ningún titubeo como el señor Rozo conductor del rodante segundos antes del impacto transitaba por la mitad del carril, condición esta que se prueba de las distancias del rodante a lado y lado de los sardineles de la vía, triturando las posibles rutas diagramadas dentro del informe de tránsito en donde el policía a su antojo y juicio propio determinó que el vehículo transitaba orillado y la motocicleta por la mitad de la vía,

Cabe la pena resaltar mi estimado Dr. Gustavo, que el informe de tránsito contiene una información meramente descriptiva (art. 143 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito CNT-) y las hipótesis reseñadas como las causas no son vinculantes sino cuando las autoridades de tránsito emitan conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños siguiendo el procedimiento previsto para ello (art. 146, ib). Por tanto, el IPAT debe

ser analizado y contrastado con las demás pruebas aportadas, porque **“el marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo.** Y el agente de tránsito impone dicha codificación a mera libertad y discrecionalidad.



Ahora bien, al momento del impacto se puede verificar cuando la camioneta sigue transitando por la mitad de la vía, invadiendo el carril en sentido contrario, de este fotograma sacada del video apartado dentro del expediente, podemos observar como el peatón acompañado con un niño menor de edad mira hacia la parte de atrás al percibir el rodante cuando pasa por su lado en exceso de velocidad por una zona urbana, transitando por la mitad de la vía, que claramente como lo indica el Código Nacional de Tránsito debía transitar a 30 k/h,



Fíjese Señora Juez, que en este fotograma se ve la luz de la motocicleta en donde se trasportaba la señorita Adriana Lucia Hernández Bohórquez, quien era la compañera permanente del hoy occiso John Fredy Acosta Briceño (q.d.e.p.), la cual transitaba adelante de la motocicleta de los dos fallecidos, lo que nos indica que efectivamente el conductor del carro señor Daniel Roza, no tuvo la precaución de maniobrar el vehículo y por venir en exceso de velocidad, perdió el control del rodante proyectándose contra las dos víctimas, en la parte trasera de la foto se observa claramente la luz de la motocicleta y se puede ver como el vehículo se levanta después del impacto produciendo su volcamiento por el exceso de velocidad en el cual se desplazaba.

En tratándose de un hecho externo, la cual pregona la pasiva en defensa de sus intereses, la jurisprudencia ha sido unánime en señalar que cualquiera que sea la causa de exoneración, de la responsabilidad civil extracontractual debe cumplir con los siguientes tres requisitos que son de la esencia de estas, los cuales son transversales para cualquiera de ellas:

1.- LA IRRESISTIBILIDAD

La jurisprudencia ha señalado con respecto al CASO FORTUITO O CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA en sentencia SC1230-2018 Radicación 08001-31-03-003-2006-00251-01, aprobado en Sala de catorce de marzo de dos mil dieciocho) veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018) **Mag. Ponente LUIS ALONSO RICO PUERTA**

“... que ella atañe a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso imprevisto y sus consecuencias no obstante los medios empleados para contrarrestarlo o sobreponerse a él y a su desenlace o en otros términos cuando en las mismas condiciones del demandado y atendiendo la naturaleza del hecho ninguna otra persona hubiere podido enfrentar sus efectos perturbadores, en tales condiciones no sería viable deducir responsabilidad pues nadie es obligado a lo imposible; la imposibilidad relativa por tanto o viabilidad de que con algún esfuerzo de quien enfrenta la situación se supere el resultado lesivo descarta la irresistibilidad”. Corte Suprema de Justicia Sen. 25 de abril del 2018 (Negrillas y subrayas fuera de contexto).

Al decir de la Corte Suprema, si el hecho puede ser prevenido o resistido por el demandado, éste deberá sufrir los efectos de la imputación que le asiste; al estar descartada la irresistibilidad se descarta por contera el caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero “la imposibilidad relativa por tanto o viabilidad de que con algún esfuerzo de quien enfrenta la situación se supere el resultado lesivo descarta la irresistibilidad”.

“Por lo mismo, no podrá reconocerse la eximente cuando el soportante de la acción indemnizatoria pudo prever y eludir el hecho, pues según se tiene establecido, no impedir el resultado dañoso estando en posibilidad y deber de hacerlo, equivale a producirlo”.

2.- IMPREVISIBILIDAD

La imprevisibilidad, según la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha de entenderse como la irrupción súbita de un suceso imposible de eludir, a pesar de la diligencia y cuidado observados con tal fin, para cuya evaluación en cada caso concreto, deberán tenerse en cuenta criterios como:

- 1) El referente a la normalidad o frecuencia.
- 2) El atinente a la probabilidad de su realización.
- 3) El concerniente a su carácter inopinado excepcional y sorpresivo.

Igualmente, sobre las causales de exoneración de responsabilidad, se ha pronunciado la C.S.J. en sentencia del 29 de abril del 2009 (Mag. Ponente Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO), este se cumple siempre que el hecho que se alega, como fundamento de la causa extraña no esté ligado al agente, a su persona; en este caso debe el demandado probar que la actuación de la víctima es la única y exclusiva causa del daño y que su actuación ha sido meramente pasiva o instrumental pues de lo contrario estará obligado a soportar de manera solidaria la indemnización; es decir que el demandado debe demostrar que NO TUVO NINGÚN GRADO DE PARTICIPACIÓN en el evento dañoso.

3.- LA EXTERIORIDAD

Para que el demandado pueda liberarse plenamente de la obligación indemnizatoria, se requiere que su proceder reúna los requisitos de toda causa extraña, esto es, *“que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad”*, y por ende sea causa exclusiva del reclamante o de la víctima. CSJ SC 23 de noviembre de 1990 G.J. CCIV, página 69.

Tenemos pues señor Juez, que el accidente era EVITABLE y RESISTIBLE si se hubiesen cumplidos las normas de tránsito por parte del señor DANIEL ESTIVEN ROZO, razón por la cual la excepción no está llamada a prosperar.

3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

La excepción presentada por el Dr. GUSTAVO HERRERA no tiene vocación jurídica de prosperar por las siguientes consideraciones fácticas jurídicas:

Aduce la pasiva que no se dan los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual cuales son el HECHO GENERADOR, EL DAÑO Y EL NEXO CAUSAL; pues bien, sobre el particular, es asunto pacífico entre los extremos del litigio que la producción del daño sufrido por la víctima obedeció al ejercicio de una actividad peligrosa (art. 2356), régimen de responsabilidad que ha tenido un variado pronunciamiento jurisprudencial en punto así es de carácter objetivo o de culpa presunta, siendo esta última la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema ha señalado que dicha responsabilidad no se origina en el riesgo ni en el daño, sino en una *presunción rotunda* de que el agente obró con malicia, negligencia, desatención o incuria, es decir, con la imprevisión propia de la culpa; en ese orden de ideas **la víctima no está obligada a demostrar el elemento culpa**, pues es suficiente establecer el hecho peligroso, el daño y el nexo causal.

Puestas, así las cosas, es de recordar que nuestras pretensiones se fundamenten en la presunción de culpa por el ejercicio de actividades peligrosas regladas por el artículo 2356 del C.C.C.

En ese orden de ideas, la pasiva está en la obligación de demostrar una causa extraña para liberarse de su responsabilidad tales como el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima; pero no en hipótesis como lo plantea el informe de tránsito y en donde se acuña la pasiva para pensar que con base en dicho documento el despacho va a fallar, así las cosas, bien pronto se advierte que de acuerdo con lo esbozado líneas arriba la demandada NO pudo cimentar con pruebas

fehacientes los eximentes de responsabilidad alegados en cabeza de su representado, por el contrario, finca su posición en la hipótesis herrada que dio el policía de tránsito en la causal 139 en la elaboración del IPAT, del material probatorio emerge que el accidente era físicamente resistible para el conductor DANIEL ROZO, al mando del vehículo, si hubiese transitado respetando las normas de tránsito, levantándose en clara contravía con las normas del Código Nacional de Tránsito consagradas en el artículo 61, las cuales son enfáticas en señalar las obligaciones, así:

“Art. 61. Vehículo en movimiento. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento”.

Pues bien analizando la situación se puede tener certeza que en cabeza del señor DANIEL ROZO, conductor del vehículo, estuvo la posibilidad de EVITAR el fatal accidente si hubiese tomado las medidas necesarias para estar atento de los demás actores viales; nótese señor Juez que el vehículo tenía en la panorámica, amplia , con buena iluminación artificial, , si el señor DANIEL ROZO, conductor del rodante hubiese tomado las medidas necesarias para transitar, muy seguramente la colisión con la motocicleta no se hubiese producido, es decir con un pequeño esfuerzo de prudencia y diligencia el hecho se hubiese **EVITADO**; igualmente el hecho era **PREVISIBLE**, pues para cualquier conductor de carreteras y avezado en estas lides era necesario **PREVER** el peligro que generaba un vehículo en exceso de velocidad por zonas residenciales.

Tenemos pues señor Juez, que el accidente era **EVITABLE** y **RESISTIBLE**. Razón por la cual esta excepción esta llamada al fracaso.

La jurisprudencia tiene decantado que en casos como el que llama la atención de este debate, solamente es obligación del demandante demostrar:

1.- LA ACTIVIDAD PELIGROSA (HECHO GENERADOR): se encuentra más que probada con el Informe de Accidente de Tránsito suscrito por el agente de tránsito JHON REYES, prueba esta suficiente y apta para dar por sentado de que el hecho generador tuvo su génesis en un accidente de tránsito, pruebas documentales que se encuentran incrustadas el cuerpo de la demanda y que dan fe, de que el señor DANIEL ROZO conducía el vehículo de placas MHS883 en el que produjo la muerte a los dos fallecidos, en el accidente de tránsito.

2.- EL DAÑO: Es indiscutible que se causó un daño, el cual está representado en la muerte de EDGAR JOSE TOBA BRICEÑO Y JHON FREDY ACOSTA BRICEÑO (Q.D.E.P.), prueba de ello es el registro civil de defunción, la cual reposa como prueba dentro del expediente.

En torno a este tópico, sobran los comentarios, pues está demostrado la violación a un interés tutelado, nada más ni nada menos que el de la VIDA.

3.- EL NEXO DE CAUSALIDAD: También, está demostrado que, entre el HECHO GENERADOR (actividad peligrosa) y el DAÑO hay una clara, evidente e incontrastable RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

Probados los tres (3) elementos arriba señalados, la actora está relevada de demostrar culpa en cabeza del señor DANIEL ROZO, pues la misma se presume y es a la demandada a quien le compete probar un elemento extraño para despojarse del juicio de responsabilidad, lo cual no acontece en el presente caso.

Así las cosas, solicito al señor Juez se sirva despachar en forma adversa a los intereses de la demandada la excepción atacada.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DEL SEÑOR EDGAR JOSE TOBA BRICEÑO

Dentro del presente caso mal hace la pasaba en solicitar una concurrencia de culpas por las actividades peligrosas ya que esta no procede por el criterio de la absorción de la actividad más peligrosa respecto de la que no lo es tanto, donde la prevalente o mayor absorbe a la menor,

Del caso bajo estudio se puede manifestar que es más peligroso conducir un vehículo por su envergadura, fuerza, peso y que tiene más capacidad de daño que una motocicleta, como quedo decantado acá, para la muestra de un botón, dentro de la colisión de estos dos rodantes los dos tripulantes de la moto resultaron fallecidos vs a las lesiones del conductor del carro.

Respecto a la relatividad de la peligrosidad se tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la actividad o mayor o menor grado de la potencialidad dañina. Lo que se traduce en qué debe verse cuál ejercicio fue causa determinante del daño, o en qué proporción concurrieron a su ocurrencia

Este tema fue tratado en la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, sentencia del 30 de abril de 1976; 25 de octubre de 1994, expediente 3000, 22 de febrero de 1995.

La relatividad de la peligrosidad consiste en que se preocupa por establecer que labor era más riesgosa en relación con otra, dejando de lado considerar cuál de ellas había causado el daño.

“Establecer sí tenían características similares o sí, por el contrario, sí diferenciaban en su tamaño, volumen potencial para desarrollar velocidad, ETC, de tal manera que uno de ellos representará un mayor peligro coma y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclamaba la indemnización coma habrá lugar a la aplicación de régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional”

La concurrencia de culpas tiene aplicación aun cuando se trata de la responsabilidad en actividades peligrosas aspecto sobre el cual la corte suprema de justicia ha dicho “cuando la víctima no intervino en la creación del peligro que sufrió porque no estuvo dentro de sus posibilidades de decisión, elección, control o realización, entonces no puede considerarse autora o partícipe del daño cuyo riesgo creo otra persona, rad 11001-31-03-030-2021-00121-01

Solicita la pasiva un pronunciamiento en torno a la concurrencia de culpas partiendo del presupuesto de la HIPÓTESIS formulada por el agente de tránsito que elaboró el Informe

Sobre el particular ya se dejó sentado que dicha hipótesis no alcanza para enervar la responsabilidad en cabeza del conductor de la moto, responsabilidad que está más que demostrada con las pruebas documentales arrimadas con el escrito de demanda.

Sobre este apasionante tema ha sido reiterada la jurisprudencia de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la que a través de la sentencia SC 2107-2018 Mag. Ponente Dr. LUIS ARMANDO VILLABONA ha marcado un derrotero, veamos:

Entre otros argumentos, manifiesta la Corte que el censor ha de detenerse en escrutar la causa eficiente del accidente si la misma prima sobre la víctima o el victimario.

En el sub-lite, bien pronto se advierte que el señor DANIEL ROZO, conductor del vehículo tuvo la oportunidad evitar el accidente si no hubiese perdido el control del vehículo por el exceso de velocidad el cual desarrollaba en una zona residencial, pues el accidente ocurre en una vía recta., sector seco con buena visibilidad, y tuvo el espacio y la distancia para evitar el luctuoso hecho si hubiese conducido con apego a las normas de tránsito

Ahora bien, la actividad de EDGAR JOSE TOBA (q.e.p.d.) no fue determinante en el acaecimiento del hecho lesivo, iba por su carril y fue golpeado de frente.

Continúa la Corte en el examen de la concurrencia de culpas:

“Así las cosas, cuando la actuación de quien sufre el menoscabo no es motivo exclusivo o concurrente del percance que él mismo padece, tal situación carecerá de eficacia para desestimar la responsabilidad civil del autor o modificar el quantum indemnizatorio.

Es deber del juez, establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia del comportamiento desplegado por cada parte alrededor de los hechos que constituyen la reclamación, en particular cuando estas provienen de una actividad peligrosa y al mismo tiempo se alegue concurrencia de conductas en la producción del hecho lesivo.

Continúa la Corte:

“(...) [P]ara que opere la compensación de culpas de que trata el artículo 2357 del Código Civil no basta que la víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producción del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la víctima efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño, pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fenómeno es el de que para deducir responsabilidad en tales supuestos (...) la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De lo cual resulta que sí, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas, que para los efectos de la gradación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. En la hipótesis indicada sólo es responsable, por tanto, la parte que, en últimas, tuvo oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo (CLII, 109. - Cas. 17 de abril de 1991) (Negrillas del suscrito)

“En este orden de ideas, cabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuación de la indemnización debida por el agente, pues para tales efectos será menester, y las razones son obvias, que la actividad de la víctima concorra efectivamente con la de aquél en la realización del daño (...)”¹ (negrillas fuera de texto).

Descendiendo al caso sub examine, tenemos que la actuación del señor DANIEL ROZO fue mucho más peligrosa y agresiva e incidió exponencialmente en la generación del accidente, en primer lugar por la clase de vehículo que manejaba, una camioneta, es decir una máquina de mayor proporción en empuje y velocidad que la hace más peligrosa frente a una motocicleta, por lo que debió extremar las medidas de cuidado; estaba pues DANIEL ROZO en capacidad de haber evitado el

¹ CSJ SC 6 de mayo de 1998, rad. 4972.

accidente, solamente con haber reducido la velocidad como lo mandan los cánones legales en estos en zonas residenciales.

Al paso, que la conducta de EDGAR JOSE TOBA (q.e.p.d.) fue solamente pasiva si bien se puede calificar de imprudente su conducta como lo afirma la Honorable Corte: *"...no es causa de atenuación de la indemnización debida por el agente, pues para tales efectos será menester, y las razones son obvias, que la actividad de la víctima concorra efectivamente con la de aquél en la realización del daño"*.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente al señor Juez se sirva desestimar la excepción de CONCURRENCIA DE CULPAS.

**5. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DE ERIKA ALEJANDRA MORENO RAMIREZ CON
RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN POR PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA MUERTE DE EDAGR JOSE TOBA
BRICEÑO.**

Es necesario recordarle al Dr. Gustavo que hay diferencias abismales entre una compañera permanente y una compañera sentimental, dentro de la demanda la señora ERIKA MORENO, actúa en calidad de compañera sentimental, por esta razón la excepción esta llamada al fracaso reclamación

**6. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DE ADRIANA LUCIA HERNANDEZ BOHORQUEZ CON
RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN POR PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA MUERTE DE JHON FREDY ACOSTA
BRICEÑO.**

Para demostrar la existencia de la unión marital de hecho en procura del pago de perjuicios cuya fuente jurídica es la responsabilidad civil extracontractual, opera el sistema de libertad probatoria, en donde el vínculo se puede probar a través de cualquiera de los medios probatorios ordinarios previstos en la ley, ya que imponer ritualidades a una relación que surge de la voluntad de dos personas con el único y exclusivo fin de constituir un proyecto de vida sin intención de solemnizar su decisión, sería tanto como someterlas a una tarifa legal proscrita en el ordenamiento jurídico y por ende inocua, ya que la sola libre convivencia de por sí ya produce los efectos jurídicos necesarios para su reconocimiento.

Así lo ha considerado el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Magistrado Ponente el Dr. ÁLVARO VALDIVIESO REYES en sentencia de segunda instancia con Radicado No. 1100160000282012025543 01 del 20 de junio del 2019:

“Confunden los apelantes los medios con los que se puede demostrar la existencia de la unión marital de hecho, con los requisitos declarativos para los efectos económicos de la sociedad patrimonial, dos figuras totalmente diferentes, pues la primera depende de la adjunción de diferentes elementos de apreciación mientras que la segunda está sometida a que se reúnan los requisitos previstos en la Ley 54 de 1.990 - modificada por la Ley 979 del 2005-, entre ellos que la cohabitación haya perdurado un término no inferior de dos años y que su declaración se efectúe a través de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial.

Sobre esa específica diferencia y para el tema objeto de controversia, la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-131-del 28 de noviembre de 2018, precisó:

*“... para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el ordenamiento procesal como lo son los testimonios o **las declaraciones juramentadas ante notario**. De allí que, exigir determinadas solemnidades para tales efectos, desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la materia y, además vulnera el derecho fundamental al debido proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como: **reparaciones económicas**, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social y exención del servicio obligatorio, entre otros (Negrillas de la Sala).*

Descendiendo al caso sub examine y para tranquilidad del quejoso se arrió declaración juramentada ante Notario Público en la cual la señora **JEYSON ORLANDO DEAZA BENAVIDES Y MONICA JULIETH CARDENAS GARZON** dan fe de la convivencia en unión marital de hecho con el obitado por más de dos años.

Ahora bien se podrá alegar que nadie puede hacerse su propia prueba por muy aquilatada y acrisolada que sea su posición moral, para ello dentro del cuerpo de la demanda solicitamos testimonios de varias personas para que testifiquen si el señor **JHON FREDY ACOSTA BRICEÑO (q.e.p.d.)** y la señora **ADRIANA LUCIA HERNANDEZ BOHORQUEZ** convivieron y compartieron techo, lecho y mesa y por cuanto tiempo y sí se puede inferir de tal convivencia una unión marital de hecho; aunado a lo anterior la señora **ADRIANA LUCIA HERNANDEZ BOHORQUEZ** ha de ser reconocida como víctima en pos del reconocimiento de los perjuicios materiales que le han sido acusados, perjuicios que son en todo disimiles al reconocimiento económicos de la sociedad patrimonial que como se viene de ver son dos figuras totalmente diferentes como lo pregonan el Tribunal y la Honorable Corte Constitucional.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos, solicito al señor Juez despache en forma adversa la excepción que estamos confutando.

7.IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE

Ha sostenido la Honorable Corte Suprema que en tratándose del salario mínimo, este se presume siempre y cuando se pruebe la capacidad o actividad laboral de la víctima, para la cual se tiene sendas certificaciones de que el señor EDGAR TOBA BRICEÑO (Q.D.E.P.) se desempeñaba como guarda de seguridad asalariado devengando el mínimo y que el señor JHON ACOSTA BRICEÑO (Q.D.E.P.) tenía capacidad laboral, como comerciante informal.

La Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-137282019 (11001020300020190319400) del 10/10/2019, Mag. Ponente Dr. AROLDI WILSON QUIROZ, reiteró su más reciente postura jurisprudencial sobre la vulneración a la reparación integral cuando se niega el reconocimiento al lucro cesante por la inexistencia de una prueba que acredite que la víctima de un daño, al momento de su ocurrencia, ejercía una actividad redituable. En efecto, insistió que la indemnización por este daño material impone, que una vez demostrado que existió una afectación negativa al ejercicio de una actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual bastará la prueba de la aptitud laboral y, para fines de cuantificación, la remuneración percibida, sin perjuicio de que esta última sea suplida por el salario mínimo legal mensual vigente.

Dice la Honorable Corte, en un caso de similar linaje al que nos ocupa y en consideración a una decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá que negó el perjuicio material por ausencia de prueba del salario mínimo del causante, se pronunció así la Corte en la sentencia referida:

“3.4. Ahora, zanjado lo anterior, basta volver sobre los apartes transcritos líneas atrás respecto de la decisión de la colegiatura criticada, para advertir que el motivo último por el cual no accedió al reconocimiento de los perjuicios materiales exigidos, lo fue la supuesta falta de acreditación del «ejercicio de una actividad [por parte de la víctima,] que genere un ingreso», con lo cual claramente desconoció el precedente de esta Sala frente al particular, cercenando los «principios de reparación integral y equidad», en tanto que, contrario a lo allí aseverado, recientemente dejó dicho esta Corte que, en casos como el auscultado, es inviable «exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un laborio redituable para acceder a su pretensión».

En ese orden, evidente es que el Tribunal para resolver en la forma en que

lo hizo, desconoció lo expuesto por esta Colegiatura -con posteridad a los precedentes que a aquél sirvieron de apoyo- frente al aspecto en comento, respecto del cual se expresó:

El ad quem negó la reparación pretendida por no haberse «comprobado que la víctima estaba en el momento [de la colisión automotriz] ejerciendo o desarrollando actividad productiva, o lo que es igual, que cuando sobrevino el accidente, trabajaba y obtenía una contraprestación por ello (salario)»

...

Tal colofón, ciertamente, desatiende el principio de reparación integral, reconocido normativamente en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, el cual ordena «que al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior..., y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez ‘tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio’ (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)» (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-0014-01).

Y es que, el actual entendimiento jurisprudencial de esta máxima, en punto a la indemnización por lucro cesante, ordena que, una vez demostrado que existió una afectación negativa al ejercicio de una actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual bastará la prueba de la aptitud laboral y, para fines de cuantificación, la remuneración percibida, sin perjuicio de que esta última sea suplida por el salario mínimo legal mensual vigente.

Así lo dijo esta Corporación:

Demostrado, entonces, que se causaron perjuicios no se puede dictar fallo exonerando de la condena bajo el argumento de que no obra demostración de la cuantía del mismo ni tampoco se puede morigerar o amainar su monto predicando de manera simple y rutinaria que no hay forma de acreditar una superior, razón por la cual tiene que acudir a deducir como retribución por los servicios prestados la correspondiente al ‘salario mínimo legal’ (sentencia de 24 de noviembre de 2008, exp.1998-00529-01) (SC, 21 oct. 2013, rad. n.º 2009-00392-01).

La utilización de la remuneración mínima es de vieja data en la jurisprudencia, soportada en pautas de equidad y sentido común, con el fin de evitar que la indemnización se difumine en divagaciones

probatorias y se garantice la protección de la víctima².

Por tanto, exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un laborío redituable para acceder a su pretensión, a pesar de encontrarse acreditada la pérdida de capacidad laboral -temporal o permanente-, «desconoce la existencia de [esta] capacidad... en toda persona humana que como atributo indestructible forma parte de su misma sustantividad existencial. La plena capacidad cordial (incluyendo la mental, puesto que concebidos al hombre como un ser único e indiviso) y por lo tanto, su habilidad, siempre entraña la posibilidad de que luchará y buscará la forma de obtener, así sea, exclusiva y egoístamente su propio sustento para sobrevivir sin solidaridad con su familia» (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01).

2. En el presente caso, una vez comprobado que... Carmona era mayor de edad, como se infiere de las copias simples del informe policial del accidente de tránsito..., del extracto de la historia médica..., y los registros civiles de nacimiento de sus hijas..., era razonable deducir que laboraba para obtener ingresos, por lo menos, en un monto igual al smlmv, por lo que en este punto el ad quem erró en sus conclusiones (se destacó - CSJ SC5340-2018, 7 dic. 2018, rad. 2003-00833-01).

Razón por la cual esta excepción esta llamada a ser despacha desfavorablemente.

8. IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO MORAL.

La Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco, en un caso de similar linaje, condenó a los demandados al pago de \$72.000.000 de pesos, por concepto del daño moral sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de los padres, hijos, esposos y compañeros permanentes de los demandantes.

De ahí que, al ser la condena establecida la tasación máxima que ha proferido la Corte Suprema de Justicia en caso de muerte, naturalmente se debe tener dicho parámetro para tasar los perjuicios inmateriales de la familia demandante.

“En efecto, las circunstancias del inmenso dolor que se refleja en la ferocidad y barbarie de las acciones padecidas por los demandantes daban, con toda seguridad, lugar a que el Tribunal impusiera una condena acorde con esa realidad, así fuese tomando la suma que como guía por

² Cfr. SC, 25 oct. 1994, rad. 3000; SC, 30 jun. 2005, rad. 1998-00650-01; SC, 6 sep. 2004, rad. 7576; SC, 19 dic. 2006, rad. 2002-00109-01; SC, 24 nov. 2008, rad. 1998-00529-01; SC, 20 nov. 2012, rad. n.º 2002-01011-01; SC22036, 19 dic. 2017, rad. 2009-00114-01; entre muchas otras.

entonces tenía la Corte establecida desde 2012 y que, frente a la indecible atrocidad de los eventos narrados y probados en este proceso ameritan – para este caso particular- una suma mayor a la que entonces tenía dispuesta (\$60,000,000.00) y que hoy reajusta a setenta y dos millones de pesos (\$72,000,000.00) para el daño moral propio sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de padres, hijos, esposos y compañeros permanentes, la mitad de ese valor para hermanos, abuelos y nietos y la cuarta parte para el resto de parientes, conservando de esa forma el criterio establecido por la sala de decisión civil del Tribunal en cuanto a que, las circunstancias modales que hubieron de sufrir los reclamantes fueron, en términos generales, las mismas y el parámetro de una tasación similar, en consecuencia, se impone.”³

“El daño no patrimonial -sostuvo esta Sala- se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación)”⁴

Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar.

No obstante, lo anterior, nos plegamos al arbitrio judicial, el cual con las pruebas que se arrimen al proceso y de acuerdo con los criterios de la

3 Sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco. Radicación número. 05736318900120040004201

⁴ CSJ SC10297-2014, 5 ago. 2014, Rad. 2003-00660-01

sana crítica ha de ser el señor Juez quien tase los perjuicios extrapatrimoniales.

Razón por la cual la excepción planteada por el Dr. Gustavo esta llamada al fracaso.

Se duele la pasiva en cuanto a la tasación de los perjuicios solicitados por los demandantes, en cuanto al tema me permito ilustrar al Dr. Gustavo de los nuevos topes de la actualidad en la materia.

El Tribunal Superior de Bogotá sala civil, Magistrado RICARDO ACOSTA BUITRAGO, en sentencia del 14 de diciembre del 2022 radicado 11001310303020210012100 en un caso de similar linaje indico:

“Los accionantes pidieron a favor de José Arturo Martínez Martínez y Marleny Suárez Daza, padres de la víctima, \$72 000 000, para cada uno; y de Arquímedes, José Alfredo y Rafael Martínez Suárez, hermanos, \$35 000 000, sumas acordes con los perjuicios reconocidos en fallos de la Corte Suprema de Justicia donde se han aceptado valores equivalentes para casos de muerte de hijo y hermano¹²; por ende, la Sala accederá a su reconocimiento,”

Por tal motivo dicha excepción debe ser llamada al fracaso

9. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACION AL EXTREMO ACTOR.

Como medio de defensa el demandado, argumenta que es inviable el reconocimiento del daño a la vida de relación en la suma pretendida por cuanto la tasación propuesta es equivocada, e igualmente al manifestar que es jurídicamente improcedente condenar al pago de suma alguna a título de daño a la vida de relación.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó, con base en varios precedentes jurisprudenciales, que el daño a la vida de relación es un perjuicio de naturaleza extramatrimonial, distinto del perjuicio moral, toda vez que tiene carácter especial y con una entidad jurídica propia.

Lo anterior por cuanto no se refiere propiamente al dolor físico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud o por lesión o ausencia de los seres queridos, sino a la afectación emocional que genera la pérdida de acciones que hacen más agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, lúdicas, recreativas, deportivas, entre otras.

Se debe recordar que esta afectación emocional se genera como consecuencia del daño sufrido en el cuerpo, la salud o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales y son causados a la víctima, de manera directa o a terceras personas allegadas a la misma.

Del mismo modo, la corporación afirmó que el reconocimiento del daño a la vida de relación, dada su stirpe extrapatrimonial, es propio del prudente arbitrio del juez, acorde con las circunstancias particulares de cada evento

Por encontrarse los perjuicios debidamente sustentados, probados, y tasados es que se le solicita al Despacho de manera respetuosa se declaren y se ordene su pago y como consecuencia de ello se rechace la excepción planteada por carencia de sustento y argumentación.

Razón por la cual esta excepción esta llamada al fracaso.

10.INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE ALLIANZ DE PAGAR INTERESES DE MORA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Basto error el de mi colega Dr. Gustavo al darle mala interpretación al artículo 1080 del Código de Comercio, cuando se establece que una vez formulada la reclamación la compañía de seguros cuenta con un mes para **demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad**. (negrillas me pertenecen)

El Art 1080 del C.Co. en la nueva redacción que le imprimió el artículo 83 de la ley 45 de 1990 establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, **aun extrajudicialmente**, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el art 1077”

A su vez el artículo 21 de la ley 35 de 1993, hoy artículo 185 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero adicionó que “el plazo para el pago de la indemnización por el asegurador podrá extenderse, mediante convenio expreso entre las partes, hasta un término no mayor a sesenta días hábiles, únicamente cuando se trate de seguros de daños en los cuales el asegurado sea la persona jurídica y la suma asegurada en la respectiva póliza sea superior al equivalente a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la suscripción” de modo que son esas dos normas que determinan los plazos dentro de los que el asegurador debe pagar la indemnización, así como la forma en que se computan los términos, advirtiéndole que el precepto contenido en el artículo 1080 opera en todos los casos en lo que respecta al momento a partir del cual empieza a contarse el término.

Si el asegurador no cumple con su obligación, ya sea porque nada dice o porque habiendo objetado, se acredita dentro del proceso declarativo la falta de razón en su argumento⁵, debe pagar, “a más de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio

⁵ El hecho de que la reclamación se objete enerva la vía ejecutiva pero no significa que la razón este de parte del asegurador.

vigente en el momento en que se efectuó el pago” según la parte final del inc. 1 del artículo 1080 en la nueva redacción que le imprimió la ley 45 de 1990.

Dichos intereses se deben no desde la fecha de presentación de la reclamación ni tampoco a partir de la ejecutoria de la sentencia, sino vencido el plazo con que se contaba para el pago, usualmente el del mes luego de la mencionada reclamación, ya que fue a partir de ese momento cuando el asegurador entro en mora.

Es por eso que en caso de que el fallo le sea desfavorable y se haya optado por solicitar condena al pago de intereses como es el asunto de marras, el despacho deberá señalar la causación de ellos a partir del vencimiento del mes siguiente en la presentación de la reclamación.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de octubre 10 de 1980, acogió la anterior tesis cuando sostuvo que en virtud del carácter de condena que tiene el fallo en contra del asegurador, los intereses de mora no deben pagarse a partir de la sentencia si no que deben imponerse con carácter retroactivo al vencimiento del mes contados desde la fecha de la presentación de la reclamación. Es decir, que la máxima entidad de justicia reitera el pago de intereses moratorios de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio, lo que implica que es una sanción proveniente de la mora en atender una reclamación dentro del plazo.

Afirma la Corte, en lo pertinente del fallo antes citado: “La sentencia que ordena el pago del seguro tiene evidente carácter de condena y no constitutiva o declarativa, pues para cobrar un seguro no es necesario ni ineludible una previa sentencia judicial, ya que la sentencia se limita hacer valer la voluntad directa del contrato e indirecta de la ley.

Y, por tanto, si es voluntad legal y contractual preexistente, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, es la de que la indemnización resultante del seguro contratado se pague en el plazo máximo previsto en la norma, tal plazo es que debe dar la medida o punto de partida de la mora en que incurrió el asegurador al no haber efectuado el pago en esa ocasión y haber constreñido al asegurado a agotar la vía jurisdiccional para obtener un pronunciamiento de condena.

Ahora bien:

En la sentencia (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.º 2005- 00346-01). La Sala ha sostenido:

Sobre el asegurado... gravita el onus probandi de la ocurrencia del siniestro, la existencia y cuantía de la lesión, correspondiendo al asegurador probar **“los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”** (artículo 1757 Código Civil, 177 Código de

Procedimiento Civil y 1077 Código de Comercio). Por tanto, acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al asegurador y de los deberes de mitigación exigibles, tiene la carga de formular reclamación extrajudicial “aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente.

Una vez efectuada la reclamación, el asegurador «estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite... su derecho» (artículo 1080). En suma, «la ley impone al asegurado o su beneficiario la obligación de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía del perjuicio si es del caso, cuya contrapartida es la obligación que el asegurador tiene de efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado el cumplimiento de los requisitos que le impone el artículo 1077» (CSJ, SC, 19 die. 2013, rad. n.º 1998-15344-01).

Por lo que esta excepción esta llamada al fracaso.

B. EXCEPCIONES DE FONDO DE CARA AL CONTRATO DE SEGURO.

1. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Manifiesta la compañía de seguros que no tiene obligación de reparar ya que según a su sentir no se acreditó la realización del riesgo asegurado ni mucho menor la cuantía de la pérdida, y por tal motivo es improcedente jurídicamente ordenar la efectividad de la póliza de seguro.

El vehículo de placas MHS883 tenía póliza de responsabilidad civil extracontractual con la compañía ALLIANZ SEGUROS S.A. la cual estaba vigente para la época de los hechos, el siniestro le fue reportado a la compañía, mediante apertura de siniestro, la póliza cuenta con los amparos que obran en el cuerpo de la póliza al igual que sus exclusiones, en el caso bajo estudio la aseguradora es convocada como demandada directa conforme al contrato de seguros ya citado sobre el vehículo de propiedad del a demandado.

La póliza de seguros tiene entre sus amparos el patrimonial, el de responsabilidad civil extracontractual y todos aquellos que obran en el cuerpo del contrato de seguros, esto quiere indicar sin lugar a dudas que la aseguradora debe ceñirse a lo que pacto en su contrato; al existir

amparo patrimonial como cobertura obliga a la compañía de seguros a dejar indemne el patrimonio de su asegurado.

La forma en que sucedió el accidente no puede ser excusa para que la aseguradora pretenda desconocer su obligación y responsabilidad con respecto al pago de los perjuicios causados con el siniestro, al estar el vehículo de placas **MHS883** asegurado mediante el contrato de seguros antes señalado le corresponde a la aseguradora por solidaridad y vínculo contractual responder por los perjuicios causados a la víctima.

La teoría del daño manifiesta que quien lo causa o debe reparar, el demandado que causó la muerte a la víctima, es la persona llamada por la ley a indemnizar a las víctimas, ahora bien respecto de los intereses moratorios que es basto el error el de mi colega Dr. Gustavo, al darle mala interpretación al artículo 1080 del Código de Comercio, cuando se establece que una vez formulada la reclamación la compañía de seguros cuenta con un mes para **demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad**. (negrillas me pertenecen)

El Art 1080 del C.Co. en la nueva redacción que le imprimió el artículo 83 de la ley 45 de 1990 establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, **aun extrajudicialmente**, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el art 1077”

A su vez el artículo 21 de la ley 35 de 1993, hoy artículo 185 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero adicionó que “el plazo para el pago de la indemnización por el asegurador podrá extenderse, mediante convenio expreso entre las partes, hasta un término no mayor a sesenta días hábiles, únicamente cuando se trate de seguros de daños en los cuales el asegurado sea la persona jurídica y la suma asegurada en la respectiva póliza sea superior al equivalente a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la suscripción” de modo que son esas dos normas que determinan los plazos dentro de los que el asegurador debe pagar la indemnización, así como la forma en que se computan los términos, advirtiéndole que el precepto contenido en el artículo 1080 opera en todos los casos en lo que respecta al momento a partir del cual empieza a contarse el término.

Si el asegurador no cumple con su obligación, ya sea porque nada dice o porque habiendo objetado, se acredita dentro del proceso declarativo la falta de razón en su argumento⁶, debe pagar, “a más de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago” según la parte final del inc. 1 del artículo 1080 en la nueva redacción que le imprimió la ley 45 de 1990.

⁶ El hecho de que la reclamación se objete enerva la vía ejecutiva pero no significa que la razón este de parte del asegurador.

Dichos intereses se deben no desde la fecha de presentación de la reclamación ni tampoco a partir de la ejecutoria de la sentencia, sino vencido el plazo con que se contaba para el pago, usualmente el del mes luego de la mencionada reclamación, ya que fue a partir de ese momento cuando el asegurador entro en mora.

Es por eso que en caso de que el fallo le sea desfavorable y se haya optado por solicitar condena al pago de intereses como es el asunto de marras, el despacho deberá señalar la causación de ellos a partir del vencimiento del mes siguiente en la presentación de la reclamación.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de octubre 10 de 1980, acogió la anterior tesis cuando sostuvo que en virtud del carácter de condena que tiene el fallo e contra del asegurador, los intereses de mora no deben pagarse a partir de la sentencia si no que deben imponerse con carácter retroactivo al vencimiento del mes contados desde la fecha de la presentación de la reclamación. Es decir, que la máxima entidad de justicia reitera el pago de intereses moratorios de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio, lo que implica que es una sanon proveniente de la mora en atender una reclamación dentro del plazo.

Afirma la Corte, en lo pertinente del fallo antes citado: “La sentencia que ordena el pago del seguro tiene evidente carácter de condena y no constitutiva o declarativa, pues para cobrar un seguro no es necesario ni ineludible una previa sentencia judicial, ya que la sentencia se limita hacer valer la voluntad directa del contrato e indirecta de la ley.

Y, por tanto, si es voluntad legal y contractual preexistente, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, es la de que la indemnización resultante del seguro contratado se pague en el plazo máximo previsto en la norma, tal plazo es que debe dar la medida o punto de partida de la mora en que incurrió el asegurador al no haber efectuado el pago en esa ocasión y haber constreñido al asegurado a agotar la vía jurisdiccional para obtener un pronunciamiento de condena.

Ahora bien:

En la sentencia (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.º 2005- 00346-01). La Sala ha sostenido:

Sobre el asegurado... gravita el onus probandi de la ocurrencia del siniestro, la existencia y cuantía de la lesión, correspondiendo al asegurador probar “**los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad**” (artículo 1757 Código Civil, 177 Código de Procedimiento Civil y 1077 Código de Comercio). Por tanto, acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al asegurador y de los deberes de mitigación exigibles, tiene la

carga de formular reclamación extrajudicial “aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente.

Una vez efectuada la reclamación, el asegurador «estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite... su derecho» (artículo 1080). En suma, «la ley impone al asegurado o su beneficiario la obligación de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía del perjuicio si es del caso, cuya contrapartida es la obligación que el asegurador tiene de efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado el cumplimiento de los requisitos que le impone el artículo 1077» (CSJ, SC, 19 die. 2013, rad. n.º 1998-15344-01).

debe la excepción ser declarada como no probada.

2. RIESGO EXPRESAMENTE EXCLUIDO EN LA POLIZA DE SEGUROS No 02992125/1030

Respecto de esta excepción desde ya manifestamos, no está llamada a prosperar, la ley del consumidor prohíbe cláusulas que limiten la responsabilidad como es el caso de Allianz Seguros S.A., pues leyendo las excepciones que transcribe el togado, no ofrece al tomador y asegurado una seguridad a su patrimonio porque según todo está excluido y es cuando uno se pregunta qué clase de seguro es el que ofrece, y si va acorde con el objeto social de la compañía aseguradora al momento de trasladar los riesgos que los consumidores financieros celebran a través del contrato de seguros con las aseguradoras.

Además, esta excepción no es la que exonera de responsabilidad a la aseguradora, máxime que tanto la ocurrencia del siniestro, como la responsabilidad del asegurado encuentran respaldo probatorio dentro del proceso, amén que con las excepciones propuestas tampoco queda exonerada, por cuanto ninguna está encaminada a desvirtuar la presunción que cobija al asegurado y además hay orfandad probatoria en ese sentido.

Sean los anteriores argumentos, más que suficientes, señor Juez, para declarar no probada la excepción y se condene en costas a la parte excepcionante.

3. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.

Esta es una excepción que podemos denominar en blanco, pues no hay un criterio conceptual de la cual se pueda inferir ausencia de responsabilidad de los demandados, por tanto, no merece mayor pronunciamiento.

Si embargo, se le aclara al Dr. Gustavo que todas las pretensiones de la demanda, tanto los hechos tienen un asidero probatorio que se vera reflejado en el desarrollo de la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento, para mayor tranquilidad del togado, es así que con las pruebas que se aportaron dentro del proceso como testimoniales y demás lo que busca es demostrar al juez el perjuicio tan enorme que se le causo a mis representados por la impericia e imprudencia en el manejo del señor GERMAN TORO OSORIO. Razón por la cual esta excepción esta llamada al fracaso.

4. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRA EXCEDER EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO.

La parte demandante, ha sido clara en solicitar que las condenas de las pretensiones no podrán exceder el límite de la concurrencia de la suma asegurada dentro del contrato de seguros, adicional a ello pues la sumatoria de las pretensiones de la demanda no exceden el amparo contratado dentro de la póliza, ahora bien, respecto del valor del deducible esta manifestado dentro del contrato de seguros por lo que esta excepción esta llamada al fracaso.

5. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGUROS.

Como colofón a esta excepción, arguye el Dr. GUSTAVO que Allianz Seguros está relevada de pago alguno por el advenimiento de la prescripción ORDINARIA y como soporte de tal excepción trae a colación el art. 1081 del C. de Co.; delantamente hemos de manifestar que no le asiste razón a la togada por las siguientes consideraciones:

Se sabe que el artículo 1081 del Código de Comercio consagra dos clases de prescripciones, la ORDINARIA que efectivamente es de dos (2) años y la EXTRAORDINARIA que es de cinco (5) años y desde ya dejo claro que esta última es la acogida por el legislador, la doctrina y la jurisprudencia en lo tocante a la responsabilidad civil extracontractual como es el caso que nos ocupa, posición esta que ha sido recogida en múltiples sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre otras, la que ha marcado un derrotero es la proferida por el Mag.

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO, Exp. 11001-31-03-009-1998-04690-01 del 29 de junio del 2007.

Antes de abordar esta sentencia, que arroja luces sobre la discusión, que se ha generado en el medio jurídico, alrededor de estas bifrontes prescripciones, necesario es transcribir los artículos 1081 y por supuesto el 1131 que es el que arroja claridad sobre cuál de las dos ha de aplicarse al caso sub judice de la responsabilidad civil.

El artículo 1081 es del siguiente tenor literal:

“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

La Corte en la sentencia arriba referenciada, ha entendido que el término de la prescripción, para el caso que nos ocupa, es de cinco (5) años y le ha servido de pivote para arribar a tal conclusión lo estipulado en el artículo 1131 ídem, el cual reza:

“En el seguro de responsabilidad civil se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.

El legislador de 1971 **vinculó la prescripción ordinara al factor subjetivo**, al disponer que los 2 años para ésta corren desde el momento *“en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”*; **al paso que ató al factor objetivo la prescripción extraordinaria**, en tanto ordenó que el término de 5 años previstos para ella comienza a partir del momento en que *“nace el respectivo derecho”* (Expediente 5360 del 3 de mayo del 2000 Mag. Ponente Dr. NICOLÁS BECHARA SIMANCAS).

Pues bien, la anterior posición jurisprudencial, sirvió como preludio para que la misma Corte en sentencia, con ponencia del Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO, arriba citada, arribara a la conclusión de que **en los casos de la responsabilidad civil la prescripción era la extraordinaria de los cinco (5) años pues el legislador la ató al factor objetivo**, tal y como se desprende del artículo 1131; dijo la Corte:

“(…)

3.3. Y es dentro de este contexto, que adquiere singular importancia la referencia expresa que el comentado artículo 1131 hace en punto al momento en que “acaezca el hecho externo imputable al asegurado” para establecer la ocurrencia del siniestro y, por esta vía, para determinar que es a partir de ese instante, a manera de venero, que correrá la prescripción respecto de la víctima”, habida cuenta que cotejada dicha mención con el régimen general del artículo 1081, resulta más propio entender que ella alude a la prescripción extraordinaria en él consagrada a la vez que desarrollada, ya que habiendo fijado como punto de partida para la configuración de la acción directa de la víctima, la ocurrencia misma del hecho generador de la responsabilidad del asegurado - siniestro-, es claro que optó por un criterio netamente objetivo, predicable solo, dentro del sistema dual de la norma en comentario, como ya se señaló, a la indicada prescripción extraordinaria, ya que la ordinaria, como también en precedencia se indicó, es de estirpe subjetiva, en la medida en que se hace depender del “conocimiento” real o presunto del suceso generador de la acción, elemento este al que no aludió la primera de las normas aquí mencionadas, ora directa, ora indirectamente, aspecto que, por su relevancia, debe ser tomada muy en cuenta.

En realidad, el legislador nacional, al sujetar la prescripción de la acción de la víctima contra el asegurador a la ocurrencia del hecho provocante del daño irrogado, y no al enteramiento por parte de aquella del acaecimiento del mismo, previó que el fenecimiento de dicha acción sólo podía producirse por aplicación de la mencionada prescripción extraordinaria, contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

La elocuencia del artículo 1131 no deja espacio para la duda o hesitación, tanto que, *expressis verbis*, aludió a la expresión “... fecha a partir”, lo que denota un comienzo, o sea el inicio del decurso prescriptivo, para nada ligado a consideraciones subjetivas, el cual es exclusivo para gobernar la prescripción de las acciones de la víctima, queriendo significar con ello que no es conducente adicionarle otro, esto es el asignado para el régimen ordinario (art. 1081 del C. de Co.), también en forma privativa, en la medida en que ello sería tanto como mezclar componentes antinómicos. O se tiene en cuenta el conocimiento, o no se tiene, desde luego con arreglo a criterios y a una hermenéutica fiable y, sobre todo, respetuosa del espíritu de la normatividad y no solo de su letra, así ella sea diciente. De ahí que entre los criterios “conocimiento” (art. 1081) segundo inciso, ib) y “acaecimiento” (art. 1131ib.), media una profunda diferencia. Al fin y al cabo, conocer es “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 2. Entender, advertir, saber, echar de ver 3. Percibir...”, al paso que acaecimiento es “cosa que sucede” y acaecer “suceder (efectuarse un hecho)”, según lo establece el Diccionario de la Lengua Española.

Es más, en sentencia de reciente data – 10 de noviembre del 2022- el Honorable Tribunal de Bogotá, al desatar un recurso de apelación de sentencia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, el cual había

declarado la prescripción ordinaria dentro de un proceso de responsabilidad civil extracontractual con Radicación 100-31-030-001-2021-00070-02, Magistrado Ponente Dr. JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO, REVOCÓ la decisión del *a quo*, al considerar que la prescripción para casos como el que nos ocupa no es la ORDINARIA sino la EXTRAORDINARIA de los cinco (5) años, es de anotar que la proponente de la excepción fue la compañía LIBERTY SEGUROS a través de su apoderada la Dra. ANA CRISTINA RUIZ ESQUIVEL, dijo el Tribunal:

“En lo que atañe a la prescripción de la acción indemnizatoria de tipo extracontractual instaurada por las demandantes Sandra Liliana y Ángela Catherine Pinzón Sánchez, nótese que el tiempo prescriptivo llamado a disciplinar esta litis es el de cinco (5) años y no el ordinario de dos (2) años, como, en forma descaminada, fue declarado por el juzgador de cognición, avalando la exceptiva de Liberty Seguros S.A., pues, escrutada la causa petendi y el petitum de la actuación en 8 Verbal 11001-31-030-001-2021-00070-02 de SANDRA LILIANA Y ÁNGELA CATERINE PINZÓN SÁNCHEZ contra UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A., MASIVO CAPITAL Y LIBERTY SEGUROS S.A. ciernes, sin lugar a equívocos, se desgaja que las aquí afectadas interpusieron el instrumento procesal de que trata el artículo 1131 del C. de Co., modificado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990, en cuya virtud demandaron directamente al ente aseguratorio para alcanzar el resarcimiento por los perjuicios extrapatrimoniales que la muerte de su señora madre, Amparo Sánchez de Pinzón (q.e.p.d.), les propició, teniendo como resorte un seguro de responsabilidad civil. Sobre dicho tópico, es pertinente traer a cuento que en un caso de similares contornos al ahora analizado, en el que los parientes de la víctima fatal de un accidente de tránsito reclamaban la correspondiente indemnización de perjuicios, 4 la Corte Suprema de Justicia puntualizó que, “(...) materia del seguro de responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño irrogado a la víctima –artículo 1131 del Código de Comercio-, surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador de la responsabilidad civil de aquél, la indemnización de los perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo instituye como beneficiario del seguro –artículo 1127 ibídem- (...) derecho para cuya efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador –artículo 1133 ejúsdem- (...).”⁵ Con esa orientación acodó el colegiado que “(...) a los seguros de esta clase, en sentido lato, se les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado que, a más de proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden directamente reparar a la víctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de beneficiaria de la indemnización. Mírese así cómo ésta, y por consiguiente sus herederos, según el caso, no ocupan la posición de asegurados, pues su derecho frente al asegurador surge de la propia ley, que ha dispuesto claramente una prestación en su favor, en calidad de beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados por el contrato de seguro - y en lo pertinente por la misma ley (...).”⁶

En esa dirección, la referida Corporación, en la misma providencia, reiteró que “(...) si bien el artículo 1131 del Código de Comercio no exceptuó la aplicación del artículo 1081 de la misma obra, que se mantiene como la regla fundante en materia de prescripción extintiva de los derechos y 4 CSJ. Cas. Civil. Sentencia del 8 de septiembre de 2011. Exp. 73449-3103-001-2006-00049-01. 5 Fallo sustitutivo de 14 de julio de 2009 exp. 2000-00235-01. 6 Sentencia de 10 de febrero de 2005. 9 Verbal 11001-31-030-001-2021-00070-02 de SANDRA LILIANA Y ÁNGELA CATERINE PINZÓN SÁNCHEZ contra UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A., MASIVO CAPITAL Y LIBERTY SEGUROS S.A. acciones derivados del contrato de seguro o de las normas que lo disciplinan, sí consagró una excepción a ese sistema, la cual es aplicable solamente al seguro de daños –en particular al seguro de responsabilidad civil– y que consiste en que a la acción directa de la víctima contra el asegurador, autorizada expresamente por la Ley 45 de 1990, es aplicable únicamente la prescripción extraordinaria contemplada en la segunda de las disposiciones aquí mencionadas, estereotipada por ser objetiva; que corre en frente de ‘toda clase de personas’, vale decir, capaces e incapaces, y cuyo término es de cinco años, que se contarán, según el caso, desde la ocurrencia misma del siniestro, o sea, desde la fecha en que acaeció el hecho externo imputable al asegurado –detonante del aludido débito de responsabilidad–.(...)”; 7 derroteros que, en pronunciamiento más reciente, han redundado, al sostenerse que “[c]otejados los dos cuerpos normativos [1081 y 1131 del Código de Comercio, el último modificado por el 86 de la Ley 45 de 1990] su aplicación al presente asunto deviene admisible acudiendo a la interpretación armónica y sistemática, para concluir que la prescripción llamada a disciplinar el caso es la extraordinaria, en cuanto demanda del transcurso de cinco (5) años contados a partir desde la consolidación del derecho, siendo oponible contra toda persona, incluidos los incapaces; en tanto, al haber señalado como punto de inicio para su consumación la realización del riesgo asegurado –siniestro–, es indudable se adoptó un sistema estrictamente objetivo para lo pertinente.” 8

Partiendo entonces del antelado escenario jurisprudencial, con abstracción de que el plazo prescriptivo se hubiere suspendido en el año 2017 con la convocatoria a la audiencia de conciliación extrajudicial efectuada en la citada anualidad, y que en el año 2020 también el computo del período extintivo se haya detenido con la aplicación del Decreto 564 de 2020, 9 lo cierto es que al encontrarse demostrado que el siniestro acaeció el 30 de marzo de 2017 con el deceso de Amparo 7 CSJ SC del 8 de septiembre de 2011 en la que reiteró el fallo de 29 de junio de 2007 expediente 1998- 04690 y la sentencia de 5 de mayo de 2011 Exp. 2004-00142. Esta última en la que concluyó que “‘ i) la prescripción prevista en el artículo 1131 del C. de Co., en tratándose de un seguro de responsabilidad civil, cuando la víctima acciona es, sin duda, de cinco años, o sea, la extraordinaria; ii) que, por lo mismo, la consagración de dicho aspecto temporal deviene, claramente, demarcada por matices objetivos y no subjetivos; iii) esto último significa que el término cuenta a partir del acaecimiento del siniestro o el hecho imputable al asegurado, independientemente que lo haya conocido o no el afectado; además, corre frente a toda clase de personas, inclusive los incapaces.”’ 8 CSJ SC5885-2016. 9 Por el cual se adoptan medidas para la

garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Artículo 1. “Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.”

10 Verbal 11001-31-030-001-2021-00070-02 de SANDRA LILIANA Y ÁNGELA CATERINE PINZÓN SÁNCHEZ contra UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A., MASIVO CAPITAL Y LIBERTY SEGUROS S.A. Sánchez de Pinzón, 10 así como la radicación de la demanda el 2 de marzo de 2021, 11 la Sala colige que en la presente actuación no alcanzó a configurarse el fenómeno liberatorio implorado, si en mente se tiene que, para dicha data, el quinquenio de la prescripción extraordinaria aún no había fenecido, proscenio comprobatorio que, sin más, pretexta la infirmación de la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia. 4.2. De cara al escrutinio de la operancia de la prescripción sobre la convocatoria que Masivo Capital S.A.S. y Unión Colombiana de Buses S.A. le efectuaron a Liberty Seguros S.A., este Corporativo otea que el director del proceso anduvo desatinado al abordar prematuramente dicha temática, ultimación a la que se arriba por cuanto, a pesar de que el artículo 278 del C. G. P. le impone el deber de fallar con anticipación si encuentra probada, entre otros medios enervatorios, la prescripción extintiva, en el sub examine -tomando como punto de partida que lo zanjado por el a quo refiere puntualmente al instituto del llamamiento en garantía-, el análisis de tal exceptiva se agotaría al resultar condenado quien convocó a su garante para exigirle la indemnización de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como producto de la decisión de fondo adoptada en la controversia principal en la que se vieron inmiscuidos. Así lo ha pregonado el Alto Tribunal de Justicia en lo Civil, al caracterizar la mencionada institución procesal como una cuestión ““(…) eventual, porque se subordina al resultado de la pretensión principal (...). De modo que sólo en el evento de resultar adversa la sentencia a la pretensión del demandante frente al demandado, se abre la posibilidad de examinar la pretensión revérsica e in eventum (...).; cas. civ. de 24 de octubre de 2000 Exp. 5387)’ 12 , relación litigiosa que, a decir verdad, únicamente involucra a quienes fungen como llamantes y llamados, sin que se comunique ““(…) a ningún otro sujeto procesal ni siquiera a la parte actora, al punto que solo será objeto de estudio en el evento de prosperidad de las súplicas, de modo que si éstas se desestimaren el 10 Folio 1, PDF 003Anexos. Expediente escaneado. 11 Acta de reparto visible en el Pdf004, ídem. 12 CSJ Civil sentencia de 1º de octubre de 2004, exp. 7560, reiterada en SC5885-2016. 11 Verbal 11001-31-030-001-2021-00070-02 de SANDRA LILIANA Y ÁNGELA CATERINE PINZÓN SÁNCHEZ contra UNIÓN COLOMBIANA DE BUSES S.A., MASIVO CAPITAL Y LIBERTY SEGUROS S.A. análisis resulta inocuo o innecesario, por regla general” 13 . (Resaltado propio). 5. Puestas de ese modo las cosas, al no reunirse el presupuesto invocado para

proferir sentencia anticipada, en los términos del artículo 278 del compendio adjetivo civil, se impone revocar la determinación de primer orden, para, en su lugar, declarar no probada la excepción de “PRESCRIPCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO -PÓLIZA NO 121150 VEHÍCULOS PESADOS”, frente a la acción de responsabilidad civil extracontractual promovida por Sandra Liliana y Ángela Caterine Pinzón Sánchez en contra de la intimada Liberty Seguros S. A. Y, respecto del llamamiento en garantía realizado por Masivo Capital S.A.S. y Unión Colombiana de Buses S.A. a la sociedad afianzadora, se ordenará al funcionario cognoscente adelantar, en su totalidad, la ritualidad correspondiente a esta clase de asuntos, para que, en el estadio procesal correspondiente, con soporte en las pruebas legalmente practicadas al interior de las diligencias, de ser el caso, resuelva de fondo lo atinente a dicha vinculación”.

Razón por la cual esta excepción esta llamada al fracaso.

“6. GENÉRICA O INNOMINADA”

Pasamos a manifestar nuestro disenso con la argumentación de la pasiva, bajo la consideración fundamental que todo medio de defensa debe de ser debidamente enunciado, explicado, fundamentado, y desarrollado, para que pueda tener vocación de prosperidad, cosa que no ocurre en particular con este medio exceptivo formulado, razón por la cual solicito al señor juez desestimar esta excepción.

OBJECION AL JURAENTO ESTIMATORIO.

La demandada pasa completamente silente frente a nuestro juramento estimatorio, pues el ataque luce completamente desenfocado, y por lo mismo, carente de virtualidad para erosionarlo, pues el escrito debe contener una crítica concreta y razonada al juramento que la pasiva estime equivocados, señalando, así mismo, las causas por las cuales nuestro juramento está desfasado o son contrarios al artículo 206; en vano resulta para el éxito de la objeción hacer planteamientos que se dicen impugnativos por pertinentes o depurados que resulten si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo ínsito en nuestro escrito.

Sean más que suficientes señor Juez, los argumentos esgrimidos para que sean despachadas desfavorablemente todas las excepciones planteadas por el Dr. Gustavo, ya que no enervaron las pretensiones de la demanda, y al contrario se abra camino para condenar en sentencia a la parte demandada por los perjuicios causados a mis representados.

P R U E B A S

2.- DICTAMEN PERICIAL

Hemos contratado la elaboración, por parte de firma especializada, para la RECONSTRUCCIÓN ANALÍTICA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO la cual es conducente, pertinente, necesaria y útil para demostrar las causas merced a las cuales se produjo el accidente e igualmente probar que el accidente era EVITABA y RESISTIBLE y que en cabeza del señor DANIEL ESTIVEN ROZO, conductor del vehículo estuvo el poder evitar el accidente; pericia que será presentada a consideración del Despacho, previo traslado ordenado a las partes; todo ello dentro de la oportunidad procesal correspondiente tal como lo establece el 227 del C.G.P., es decir que solicito del despacho un tiempo prudencial para arrimar el referido expertico, el cual en el corto lapso de tiempo para descorrer las excepciones era imposible arrimar la reconstrucción del accidente.

Notificaciones las recibo en LA CALLE 146 No 7-64 oficina 403 en la ciudad de Bogotá, tel. 317 372 1507, correo electrónico rivas_harold@hotmail.com

Atentamente,

HAROLD ARMÁNDO RIVAS CÁCERES
C.C. No.80.747.496 de Bogotá
T.P.No.189.674 del C.S.J.